

El Alto, La Vorágine de Una Ciudad Única

By

Xavier Albó

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN
DEL CAMPESINADO (CIPCA), LA PAZ, BOLIVIA

RESUMEN

An historical overview of the quickly developing city of El Alto is followed by an analysis of the many contradictions within this principally Aymara city that forms part of the greater metropolitan area of La Paz, Bolivia. A particular focus on neighbourhood organizations, youth culture, and political organizing demonstrates the unique characteristics and unusual potential of what has become the fastest growing city in Latin America. Its significance is further underlined by its role in the October 2003 demonstrations that led to the fall of the Sanchez de Lozada government. The article concludes with a general discussion of these massive uprisings and their significance for both El Alto and Bolivia.

PALABRAS CLAVES: Bolivia, El Alto, inmigrantes urbanos aymaras, levantamientos socio-políticos, juntas vecinales. **KEYWORDS:** Bolivia, El Alto, Aymara urban immigrants, socio-political uprisings, neighbourhood organizations.

EN EL “OCTUBRE ROJO” DE 2003 LA CIUDAD de El Alto, en Bolivia, saltó a los titulares de la prensa internacional. Un masivo levantamiento popular en esta desconocida ciudad que muchos ni siquiera lograban ubicar en el mapa de Bolivia, obligó en cuestión de días al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada—que poco antes era ensalzado por los organismos internacionales por su programa modélico de modernización y ajuste estructural—a levantar las manos, presentar rápidamente su renuncia y huir del país.

Aquí repasaré primero algunos elementos históricos y rasgos contemporáneos que permitan comprender algo mejor esa ignorada ciudad, y la catarsis que ésta vivió en aquellos días de octubre, tema con que culmina también el trabajo.

Journal of Latin American Anthropology, Vol. 11, No.2, pp. 329–350. ISSN 1085-7025, online ISSN 1548-7180. © 2006 by the American Anthropological Association. All rights reserved. Please direct all requests for permissions to photocopy or reproduce article content through the University of California Press's Rights and Permissions website, www.ucpress.edu/journals/rights.htm.

Una Corta Pero Vertiginosa Historia

La primera vez que yo pasé por El Alto de La Paz fue en una tarde fría de agosto 1954, llegando en tren hacia La Paz. Casi ni me di cuenta. Aquella pampa fría y vacía en los afueras de la ciudad de La Paz seguía siendo el final del inmenso altiplano, que acababa en La Ceja, a unos 4.100 metros de altura, para cortarse de golpe en una hoyada que de forma abrupta descendía unos 400 metros y seguía deslizándose hasta unos 3.200 metros de altura en su parte más baja donde apareció súbitamente la ciudad de La Paz, la mayor del país.

Por fotos aéreas de la época se estima que El Alto tendría entonces unos 3.000 habitantes.¹ Transcurridos apenas 50 años es ahora una ciudad diferenciada con 870.000 habitantes, ya más que La Paz, y que se extiende sobre una superficie plana de 27.000 has., el triple de La Paz en la hoyada. La larga Ceja,² que se extiende por más de veinte kilómetros, corta y separa nítidamente el territorio plano de El Alto y el de La Paz, por toda la hoyada y sus laderas.

Remontémonos más adentro en el tiempo. Desde antes de los españoles y de los incas aquel valle profundo, llamado Chuqi Yapu, “La parcela de metal precioso,” ya estaba poblado por gente *mitma* [trasplantes] de distintos *ayllus* y *markas* (unidad superior que agrupa varios *ayllus*) del altiplano, que lo apetecían por su mayor potencial agrícola y, probablemente, también por el oro que arrastraban sus ríos. Al llegar los españoles en 1548, establecieron allí la ciudad de Nuestra Señora de La Paz y, desde entonces, La Paz española sigue siendo también la Chuqi Yapu (hoy pronunciado Chukiyawu) aymara, con más población originaria que españoles. Trepano hasta La Ceja, los caminos se repartían hacia todo el virreinato. Seguía siendo tierra de *ayllus*.

En los años 1780–81, al atardecer del período colonial, El Alto cobró notoriedad por ser el bastión principal desde el que los rebeldes aymaras, liderados por Julián Apaza Tupaq Katari y su esposa Bartolina Sisa, y quechuas, liderados por Andrés Tupaq Amaru y su esposa aymara Gregoria Apaza (hermana de Julián) establecieron su cerco de casi seis meses sobre la ciudad criolla de La Paz, causando una gran hambruna y muerte en los sitiados hasta que fueron dispersados por las tropas españolas llegadas desde Buenos Aires y Lima. La memoria de aquellos años ha quedado profundamente grabada en el subconsciente de todos, con un síndrome de culpa y miedo en los descendientes de los sitiados; y como un modelo y bandera de lucha en los aymaras, a pesar de que entonces salieron derrotados.

Cuarenta años después llegó la Independencia. Pero con la República apenas cambió la situación colonial aymara anterior a aquella rebelión, salvo por un aumento de las haciendas, sobre todo desde que, tras la victoria de los liberales sobre los conservadores en 1899, la sede del gobierno y de los negocios mineros se trasladó a La Paz.

Con este cambio la ciudad empezó a crecer mucho más rápidamente, incluyendo más inmigrantes aymaras, atraídos por aquel temprano boom económico urbano. Su población pasó de unos 79 mil en 1909 a 136 mil en 1928 y 267 mil en 1950 (Guardia 1971).

En 1952, la Revolución Nacional del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), que tanto transformó el escenario político del país, junto con su Reforma Agraria de 1953 puso también en marcha una Reforma Urbana en el contorno de La Paz. Las numerosas haciendas de las laderas entre La Paz y El Alto y más allá fueron expropiadas y en pocos años toda la zona se fue poblando sobre todo con aymaras, tanto por el rebalse hacia arriba que seguía teniendo la población de La Paz como por la mayor inmigración de los excedentes de población rural después de una primera generación de campesinos liberados de la hacienda. Unos veinte años después, la ciudad ya podía imaginarse como un Cañón del Colorado lleno de viviendas—muchas de ellas de ladrillo sin revocar y techo de calamina—que iban trepando por sus empinadas laderas y se desbordaban por las pampas sin límite de El Alto. Todo ello constituía todavía una única ciudad que, según el censo de 1976, tenía ya 654.713 habitantes.

Ese mismo año realizamos, con Thomas Greaves y Godofredo Sandoval (1981–1987), un estudio sobre los aymaras de la ciudad de La Paz, en el que caracterizamos esta ciudad en los siguientes términos:

La capital³ de Bolivia tiene dos rostros y corazones: Uno notorio, La Paz, que es el corazón de la vida de país. Otro oculto pero presente, Chukiyawu, que es el corazón del mundo aymara. Cada madrugada por las radios habla Chukiyawu; La Paz se le une desde las 8. La Paz tiene su centro en la Plaza Murillo; Chukiyawu en la Tumusla y Buenos Aires. No son dos ciudades paralelas sino dos caras de una realidad dialéctica. La Paz quisiera borrar a Chukiyawu del mapa, pero vive de su trabajo. Y Chukiyawu se sigue alimentando con miles de llegados del Altiplano—los “residentes”—que necesitan a La Paz.

Por entonces El Alto ya tenía mucha consistencia. En 1962 los 3.000 habitantes de 1950 se habían triplicado y en 1976 eran 95.455, más de treinta veces la población de 1950.

En los años siguientes siguió creciendo con una tasa anual de más del 10 por ciento, superior incluso a la de la ciudad de Santa Cruz y una de las mayores en el continente. Contribuyó también a ello una brutal sequía de 1982–83 en todo el altiplano y la “relocalización” (léase, despido) de miles de mineros y obreros como fruto del célebre Decreto 21060 de 1985, que instaló en el país el modelo de globalización neoliberal.

Precisamente entonces, el 6 de marzo de 1985, El Alto adquirió su nuevo status como “Cuarta sección municipal” (municipio) independiente de La Paz y el 26 de

septiembre de 1988 fue elevado al rango de ciudad, a la que en aymara se la llama *Altupata Marka* o incluso *Alax Pacha* “El mundo de arriba,” término con que se denomina también al cielo. Se iniciaba así un nuevo capítulo tanto para El Alto como para La Paz y para todo su conjunto metropolitano. Limitándonos a El Alto, en el censo de 1992 ya tenía 405.492 habitantes y nueve años después, en el del 2001, llegaba a los 647.350 que, proyectados al 2007, son unos 870.000, por encima de la proyección para la ciudad de La Paz.

Panorama Hasta el Año 2002

Tras la división en dos ciudades ocurrida en 1985–88, ¿seguirá válida aquella semblanza que hicimos en 1976, como una ciudad con dos caras y dos nombres? ¿O habrá que hablar de El Alto como la capital del pueblo aymara, en contraste con La Paz, capital criolla de Bolivia?

En mi opinión, no. La Paz más El Alto siguen siendo una metrópoli unitaria con una dependencia mutua y estructural muy fuerte. Hay un transitar diario de cien mil personas o más, a pie o abarrotadas en miles de minibuses, sobre todo para fines laborales. El Alto cobija a su vez instituciones clave para que La Paz pueda seguir viviendo, como son sus fuentes de energía y su comunicación terrestre, aérea y virtual con el resto del país y el exterior. Si La Paz sigue siendo el corazón político del país, El Alto sigue siendo el pulmón de La Paz . . . y, vaya confluencia semántica: la palabra aymara *chuyma* es a la vez pulmón, en su sentido físico y corazón en su sentido figurado afectivo. Además, en momentos políticos clave paceños y alteños se han unido como “un solo corazón,” para decidir juntos la suerte del país.

Lo que sí es cierto es que, con esta separación administrativa en dos ciudades, la diglosia social, cultural y lingüística entre lo aymara y lo criollo ha aumentado, reforzada además ahora por la concentración mucho mayor de pobreza en El Alto. Los criollos paceños de rancio abolengo se quejan de que el bello nombre histórico de su ciudad —Nuestra Señora de La Paz—vaya quedando ahora reducido a “La Hoyada,” en el lenguaje popular, sobre todo alteño. El corte físico tan pronunciado de La Ceja, hecho ahora también de corte administrativo, lleva a marcar más la diferencia entre las dos ciudades con una (falsa) construcción social imaginaria que ve arriba a los aymaras y abajo a los criollos, en términos geográficos, pero arriba a los paceños y abajo a los alteños en términos económicos y sociales. Los barrios socialmente más bajos están y sobre todo se siguen expandiendo en las alturas altioplánicas, y los socialmente más altos se refugian y aíslan en lo más hondo de La Hoyada. Los aymaras de El Alto están con mucha frecuencia en La Paz, donde siguen teniendo una presencia muy mayoritaria en toda la ladera oeste hacia La Ceja, con importantes puntos de permanente contacto y flujo diario entre ambas ciudades.

Pero sólo algunos de ellos llegan hasta los reductos más burgueses de la zona sur y baja de La Paz. A su vez los más ricos de La Paz sólo *pasan* por El Alto en ruta hacia otras partes del país, o quizás en carro propio o radio taxi hacia el aeropuerto para de ahí circular por el mundo; y se espantan si por el camino tropiezan con alguna de esas tan frecuentes protestas populares de los alteños. El imaginario del cerco anticolonial de Tupaq Katari sigue siempre presente.

Pero diferenciar las dos ciudades como una criolla y la otra aymara es erróneo. Una y otra son multiétnicas y pluriculturales. Según el Censo 2001, en El Alto un 74,2 por ciento de los mayores de 15 años se autoidentificaron como pertenecientes al pueblo aymara, otro 6,4 por ciento como quechuas, un 0,7 por ciento con otros pueblos y sólo el 18,7 por ciento como no pertenecientes a ningún pueblo indígena originario. Pero en La Paz fueron también un 50 por ciento los que se identificaron como aymaras y otro 10 por ciento como quechuas.

El Territorio Urbano

La historia previa nos ayuda a comprender mejor la disposición territorial de la ciudad de El Alto. Su núcleo articulador sigue siendo esta parte central de La Ceja que se ocupó más temprano y ahora es la más urbanizada y rica. Desde allí el resto de la ciudad se expande y divide en dos grandes alas: una más concentradamente aymara hacia el norte y otra, con una diferenciación socio cultural ligeramente mayor, hacia el sur, separadas ambas por la gran explanada del aeropuerto, que cualquier día deberá abandonar este lugar para ceder su espacio a un nuevo gran centro urbano.

A pesar de su fácil geografía, que contrasta con la de La Hoyada de La Paz, El Alto fue creciendo de manera desordenada y espontánea como *villas* (barrios o zonas) salpicadas y al principio discontinuas, pero que se van llenado hasta formar un continuo cada vez más denso y después empiezan a elevarse hacia arriba con casas de más pisos, a medida que la gente se instala y mejora. Sólo unas pocas son fruto de sofisticados planes urbanizadores, ligados tal vez a dotaciones de viviendas para determinados sindicatos y asociaciones. El resultado es un complejo mosaico de villas y urbanizaciones de trazado no siempre previsible.

Dentro de las villas, la forma más común de asentamiento familiar básico es a través de lotes rectangulares variables comprados legalmente o, con demasiado frecuencia, de una manera sólo semi-legal a través de los numerosos “loteadores,” a los que a veces se los ha caracterizado como “el enemigo nº 1 de El Alto” (Antezana 1993:98–102). En El Alto frígido no ocurren invasiones masivas y organizadas si brotan barrios de tugurios (*slums*) hechos con cuatro latas, trapos y otros materiales improvisados, como en otras ciudades del Tercer Mundo. Lo que sí hay son calles y calles, unas casi vacías pero llenas de huecos, polvo o barro, montones de piedras o zanjas por lentas obras públicas o barriales; otras, congestionadas de

tráfico, por la mezcla caótica de minibuses—los taxis alteños son pocos y demasiado caros para la gente común—y puestos y más puestos callejeros de comercio hormiga. Hay numerosas ferias a campo abierto, sobresaliendo la “16 de Julio,” que atrae cada domingo a quizás setenta mil personas. En ciertos días algunas avenidas pueden llegar al taponamiento total porque son el lugar público preferido para desfiles, marchas cívicas y los ensayos y entradas oficiales de conjuntos de baile de las permanentes fiestas barriales o de toda la ciudad; y también para marchas y protestas callejeras, algo bastante frecuente e imprevisible sobre todo hasta el 2005.

En barrios más céntricos y antiguos ya se pueden ver casas más sofisticadas, con estructuras de cemento, paredes de ladrillo y techo de calamina, varios edificios de hasta tres y cuatro pisos bien acabados y hasta alguno emblemático todavía más alto y refinado. Pero lo más común, son casas inacabadas (con lo que bajan también los impuestos), donde la gente vive en la parte ya construida, con la esperanza de seguir construyendo y mejorando la vivienda cuando tenga los medios para ello. Muchas de estas viviendas son autoconstruidas, pues en los lugares de origen de los inmigrantes es bastante común ser a la vez agricultor y autoconstructor.

Un número significativo (pero nunca censado) de alteños mantiene una doble residencia urbana y rural, puesto que la gran mayoría de inmigrantes a El Alto provienen del altiplano aymara. Al tener terrenos o al menos la esperanza de heredarlos en la comunidad de origen, mantienen una serie de obligaciones morales con la propia parentela y quizás jurídicas con la comunidad, en términos de participar en reuniones y asambleas, pagar cuotas e incluso cumplir cargos (Albó 1991, cuadros 4 y 5). Viene a ser como un nuevo “piso ecológico” *urbano* dentro de la conocida lógica ancestral andina de asegurar el acceso a diversos pisos ecológicos. La Ley de Participación Popular de 1994, que dio nuevo protagonismo a los municipios rurales y les transfirió aproximadamente un 20 por ciento del presupuesto nacional, de acuerdo a su población y sus niveles de pobreza, ha fortalecido esos vínculos. Muchos municipios rurales del altiplano tienen incluso una segunda sede en la ciudad de El Alto, quizás en la segunda vivienda del alcalde, quien se traslada a su municipio sólo en fines de semana, el día de feria y cuando ocurren actividades especiales. Este fenómeno es el que más podría acercarnos a ver El Alto como la capital del altiplano aymara, pero sin que ello se contraponga a las íntimas vinculaciones que esta ciudad sigue teniendo también con La Paz, como parte de la misma masa metropolitana.

Ser Aymara en El Alto

Como vimos, tres de cada cuatro alteños se siente aymara. Los distritos al norte del aeropuerto son los más aymaras, por encima del 80 por ciento, llegando al máximo del 88 por ciento en el distrito siete en el extremo noroeste.⁴ Pero ninguno de los nueve distritos de El Alto queda por debajo del 60 por ciento, aunque en los barrios

más ricos de la Ciudad Satélite (dentro del distrito uno, en La Ceja), hay las únicas cinco zonas en que ningún grupo étnico llega a ser la mayoría absoluta. En ellas los aymaras son entre el 32 y 46 por ciento, frente a los que no se consideran indígenas (entre 34 y 42%). Allí hay también una mayor concentración de quechuas, con una zona en que alcanzan el 24 por ciento.

Pero, ¿qué significa ello en este nuevo contexto urbano? Una primera diferencia es que en una ciudad como El Alto ser aymara ya no es tan sinónimo de hablar regularmente en aymara. En el conjunto de la ciudad de El Alto, según el Censo 2001, prácticamente todos (96%) ya saben hablar castellano, el 48 por ciento sabe además aymara (dos de cada tres aymaras) y otro 5 por ciento sabe quechua. Los mayores entreveran más el castellano con su lengua originaria sobre todo cuando hablan entre ellos. El aymara se oye y escucha también bastante en varias radios urbanas e incluso en un canal alteño de televisión, muy dedicado a retransmitir fiestas barriales. Pero los jóvenes ya lo hacen mucho menos y bastantes ni siquiera conocen la lengua de sus padres. La entienden algo pero no la hablan, aunque incorporan términos y elementos aymaras en muchas de sus actividades, marcando así su identidad. Pero muchas de las experiencias nuevas de estos aymaras urbanos, sobre todo los jóvenes, suponen al mismo tiempo una apertura creciente a la cultura de todo este nuevo entorno urbano.

Tres tipos de actores nos permitirán comprender mejor tanto la ciudad como lo que en ella ocurrió en 2003. Estos son las juntas vecinales, los políticos y los jóvenes.

Organizados Todos en Juntas Vecinales

Si la comunidad es el núcleo fundamental para expresar y reproducir el modo de ser aymara en el campo, ésta podría ser también una clave interpretativa para explicar el hecho tan notorio de que todos estos aymaras urbanos de El Alto, hablen o no la lengua, siguen ubicados y organizados en villas, cada una de ellas con su junta o juntas vecinales. Como ocurría ya en las comunidades rurales de las que muchos alteños provienen, prácticamente no hay sector alteño cuyos vecinos no formen parte de alguna asociación de vecinos, aunque después participen poco en sus reuniones. Pero ocurre ahí una paradoja, entre esta herencia cultural rural y el nuevo contexto urbano.

A partir de la herencia cultural rural, resulta notable la manera cómo esta ciudad se ha organizado desde sus viviendas, pasando por los o las “jefes de calle” o de manzano (“manzaneras”) y por la junta de cada zona y barrio, hasta la poderosa Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, fundada en 1979, cuando las juntas ya se habían multiplicado por siete, desde las 6 de 1952 hasta 44. Cinco años después ya eran 86; y veinte años más tarde, en 2004, la FEJUVE ya reconocía a 422 (Sandoval y Sostres 1989:21, 77–102; Quisbert 2003; USAID 2004). No es algo ausente

en otras ciudades, pero sorprende su omnipresencia en todos los rincones y niveles de la ciudad. En La Paz ocurre también en las villas de sus laderas pero es mucho menos notorio en las partes céntricas de la ciudad.

En los primeros tiempos de cada nuevo barrio y su correspondiente junta, reconocida o no por la FEJUVE, prevalecen las actividades conjuntas para dotarse de la infraestructura mínima del barrio, desde la consolidación de los lotes (en lo posible) hasta los servicios básicos de agua, electricidad, calles, etc., con un mayor énfasis en la participación de los vecinos en esas demandas básicas e incluso en trabajos comunales:

Aquí en El Alto, las aceras, los empedrados de las calles, nosotros los hacemos con nuestros propios fondos, no con el impuesto que pagamos a la Alcaldía, nunca nos ayudan. En cambio en La Hoyada la alcaldía se lo hace a los caballeros. Nunca agarran la piedra, la picota sino simplemente dicen: "hagan". (Sandoval y Sostres 1989:94-95)

A ello se unen trámites y acciones reivindicativas de los dirigentes, a veces acompañados por muchos vecinos, ante las autoridades municipales para que atiendan a sus reclamos y, cada vez más, hay además una coparticipación del municipio y otras instancias estatales mediante programas como alimentos por trabajo y otros, como va ocurriendo también en el campo, sobre todo a partir del fortalecimiento municipal surgido de la Ley de Participación Popular de 1994.

En todo ello hay indudables paralelismos entre estas juntas vecinales, en sus diversos niveles, y la organización comunal existente en el campo, camuflada desde 1952 en el nombre prestado de "sindicatos campesinos."⁵ Incluso los procesos por los que estas juntas se fusionan o subdividen responden a motivaciones muy frecuentes también en las comunidades rurales y sus "sindicatos campesinos" (Albó 2002:Parte I). Este es el aprendizaje previo que los inmigrantes llegados del campo tienen al llegar a la ciudad y es, por tanto, normal que esté en el trasfondo de su actuar urbano.

Pero la otra vertiente de la paradoja es que la gente que se asienta en una misma zona o incluso en la misma calle muchas veces viven lado a lado sin apenas conocerse. Muchas de sus redes de contacto se constituyen en base a otros criterios como el parentesco, los paisanos, grupos de edad que coinciden en sus estudios, lugares de trabajo, deporte, fiesta y celebración, culto o devoción, etc. estén o no en el mismo barrio.

Son relativamente pocos los barrios que surgieron con gente del mismo lugar y los pocos que lo hicieron pronto se llenaron con gente de muchas otras partes. El fortalecimiento de la relación personal con vecinos desconocidos es, por tanto, un trabajo que se va haciendo de a poco y de manera selectiva en torno a trabajos o eventos comunes, incluidos los trabajos y reuniones de la junta de vecinos. Para ello es un factor favorable el hecho de instalarse muchos en sus propios lotes, pues les da una mayor estabilidad que en tantas otras urbes donde la gente va cambiando de

vivienda y barrio, siempre a la merced de alquileres y anticréticos. Por tanto aumentan también las posibilidades de entablar relaciones entre ellos. Sin embargo, a diferencia del campo, en la ciudad muchos habitantes de una determinada zona son miembros de la correspondiente junta sin llegar siquiera a conocerse todos. Por el mayor tamaño y la mayor dispersión de ocupaciones, en las reuniones de las juntas vecinales no acuden todos los jefes de familia sino sólo una minoría, por mucho que en el local se encuentren un número notable de personas, incluso mayor que los que se reúnen en las asambleas comunales rurales.

Como consecuencia de todo lo anterior, el nivel democrático de estas juntas es también menor que en el campo, tanto en la forma de nombramiento y renovación de sus dirigentes como en la manera de llegar a tomar sus decisiones. Es, por ejemplo, común que para asegurar ciertas movilizaciones se apele a multas u otras sanciones para los no asistentes, aunque después no siempre se aplican. El autoritarismo del grupo relativamente elitista que llega a esos cargos suele ser mayor a medida que se va escalando a los niveles superiores y, a veces, se queda en ellos. En los niveles superiores de FEJUVE pueden incrustarse también individuos con intereses políticos o económicos muy particulares, quienes utilizan esta organización para su propio beneficio.

Pese a esas deficiencias, las juntas vecinales en sus diversos niveles son sin duda reconocidas por toda la población como la organización matriz que les representa y, con o sin presiones según el caso y asunto, siguen su liderazgo, se adhieren a sus instrucciones y movilización y, llegado el caso, cambian a sus dirigentes. Gran parte de las protestas sociales de cualquier tipo se catalizan a través de estas juntas y sus asociaciones de nivel superior, que ponen en marcha tanto su capacidad movilizadora como sus mecanismos de sanción frente a los remisos. Según el tema y la motivación popular que suscite cada caso, será realmente una movilización masiva y consensuada o puede ser que se introduzcan y se entreveren intereses particulares o políticos de algunos dirigentes de nivel superior,⁶ con las subsiguientes sospechas y fricciones. Son también las juntas las que se organizan para poner coto a las fechorías de pandilleros y ladrones. No es raro, por ejemplo, ver un muñeco colgado de un poste, con la advertencia de que en ese barrio así se hará con ellos. Pero en El Alto no se reportan tantos casos de linchamientos espontáneos hechos por multitudes.⁷ como, por ejemplo, en la periferia urbana de Cochabamba y Santa Cruz; quizás—cabalmente—por la mayor fuerza y organización que aquí tienen las juntas vecinales.

Política Alteña en las Juntas y Más Allá

En las juntas de la primera época del MNR y de las dictaduras militares prevalecía ya su vinculación clientelar con los gobiernos del momento, con el fin de poder recibir la debida prestación de servicios. Pero tan pronto como se inició el proceso

democrático—que implicó cuatro años (1978–82) de forcejeo entre gobiernos elegidos y golpes militares—muchas juntas fueron tomando posiciones más contestatarias. Así, durante el sangriento golpe de Natush (1979), la población alteña no le aceptaba y éste llegó a ametrallarla desde un helicóptero, lo que no la acalló sino que aumentó su irritación.

Más allá de las juntas y de la FEJUVE, en El Alto se acumulan otras experiencias como los gremios con artesanos de todo tipo, sindicatos urbanos—muy distintos de los “campesinos”—y la acción de los partidos políticos. Muchas de estas organizaciones están aglutinadas en torno a la Central Obrera Regional [COR] de El Alto, que—paradójicamente—se creó como resultado del crecimiento del sector gremial a partir de las medidas neoliberales de 1985, que llevaron a cerrar fábricas y tanto debilitaron a la histórica Central Obrera Boliviana [COB], de la que enseguida se hizo miembro.

Merece mención especial el impulso ideológico que en ello y en las propias juntas dieron algunos ex-dirigentes mineros que quedaron “relocalizados” o despedidos como resultado de esas mismas medidas neoliberales. Se instalaron en El Alto, primero en simples carpas y después, gracias a su larga tradición de lucha organizada, también en casas propias, a través de su “Asociación de Mineros Relocalizados sin techo” y otras. No es de sorprender que con su experiencia acumulada llegaran pronto a hacerse sentir también en las juntas vecinales:

Debe ser una tarea de todos los compañeros relocalizados incorporarse a las juntas de vecinos. Nosotros vemos que el trabajo que hacen en las Juntas Vecinales es complejo, pero hay que hacerlo . . . Inicialmente hemos estado como Asociación, pero hemos ganado la voluntad del manzano y llegar a ser presidente del manzano. Con eso creo que vamos a llegar a hacer prevalecer lo que es el sentimiento obrero. Los compañeros [pobladores no mineros] no tienen nivel de organización. No tienen experiencia. Son muy indisciplinados, no les interesa . . . Eso es lo que nos ha permitido imponernos con mayor autoridad (Sandoval y Sostres 1989:162, 166).

En los últimos años la acción política de los alteños se ha ido extendiendo a otros muchos grupos sociales que han ocupado titulares de la prensa en años recientes: los poderosos sindicatos y “cooperativas” de transportistas; gremios de comerciantes y otros grupos ocupacionales tan diversos como los matarifes y las vivanderas, los costureros de prendas y los “ropavejeros” que importan y revenden ropa usada, los contrabadistas de todo nivel que viajan periódicamente a Desaguadero o Iquique; la Federación de maestros urbanos, con fuerte influencia trostkista, y maestros rurales con doble residencia también en El Alto; la Federación de juntas escolares, que—a diferencia de sus homónimas en las comunidades rurales—en El Alto están a veces integradas y controladas por gente aprovechada que ni siquiera son padres de familia vinculados a un determinado establecimiento educativo.

En toda esta relación entre partidos políticos y estas diversas organizaciones de base hay siempre un complejo juego de intereses políticos y sociales. Como dicen Monasterios y Tapia (2001:65–68):

Se trata de una estrategia de diversificación de relaciones con los partidos, ya que el tratamiento de sus demandas y proyectos pasará necesariamente por los partidos en función de gobierno municipal sobre todo . . . Por un lado, desde la sociedad civil, sí se ofertan bienes políticos como el voto, candidatos y trabajo político proselitista de grupos humanos en las campañas políticas; pero desde el otro lado, el supuestamente más político, el de los partidos, se oferta más bien bienes que no son políticos, como son los víveres o los materiales . . . Tenemos entonces una relación paradójica.

¿Simple oportunismo? Es posible que los interesados recuerden la estrategia productiva altiplánica de repartir los riesgos climáticos del campo sembrando en diversos tiempos y lugares para diversificar sus riesgos “sin reír mucho no llorar mucho” (“no poner todos los huevos en la misma canasta” dirían en Castilla) y el principio de reciprocidad llamado *waqi* o “al partir,” en que cada uno pone lo que más tiene y luego se reparten los resultados.

En la relación con determinados partidos influye también sin duda la ideología y filiación política específica de sus dirigentes, como el trostkismo de los maestros, la utopía socialista de los ex-mineros, o el sueño indianista de algunos dirigentes de juntas y estudiantes; o, en la otra vertiente, el “orden, paz y trabajo” que reclama la derecha para mantener los privilegios de sus clientes transportistas y comerciantes.

Pero en unos y otros es probable que, a la hora de la verdad, predomine una actitud pragmática coyuntural y que la ideología sea más bien el adorno retórico. Por eso, en las quince elecciones ocurridas en dos décadas de democracia, los alteños han optado en zigzag por seis partidos distintos que cubren todo el espectro político, con preponderancia de las opciones populistas. Incluso en las últimas elecciones del 2005, escogieron masivamente por presidente al aymara Evo Morales, del MAS, pero pragmáticamente ratificaron a un prefecto surgido del oficialista MIR y aliado entonces a la nueva oposición de derecha.

Jóvenes: ¿Los Nuevos Aymaras Urbanos?

Tras todo este tipo de arreglos políticos asoma permanentemente lo complejo e incierto que resulta sobrevivir o mejorar en El Alto, un problema particularmente agudo para la población joven.

Esta ciudad es una inmensa caja de pandora para todo tipo de trabajadores por “cuenta propia,” es decir, los que han ido generando sus propios puestos de trabajo,

muchos de ellos informales y precarios aprovechando con mucha iniciativa y creatividad cualquier resquicio económico, laboral o político que les permita ganarse unos pesos. Según el Censo 2001, en nueve años los trabajadores por cuenta propia en El Alto habían subido de un 27 por ciento en 1992 (siete años después de la adopción del modelo neoliberal) hasta un 38 por ciento, bastante más que en La Paz y en las otras grandes ciudades. Pero hay que saber interpretar esas cifras censales. Una encuesta más precisa realizada por CEDLA un año antes del mismo censo concluía que allí el 69 por ciento de toda la mano de obra estaba en el sector informal (semiempresarial, familiar y doméstico), alcanzando el 82 por ciento en el caso de las mujeres, concentradas éstas sobre todo en el trabajo familiar (71%); y del total de asalariados, sólo un 27 por ciento de los varones y un 10 por ciento de las mujeres tenían alguna forma de seguridad social (Rossell y Rojas 2002:14 y 19).

Dentro de este panorama, son obviamente los jóvenes los que más sufren para insertarse por primera vez en el mercado laboral. Los recién llegados del campo más fácilmente se inician como ayudantes en una construcción u obras públicas o—en el caso de las jovencitas—empleada doméstica, sobre todo en La Hoyada de La Paz. Pero muchos de ellos ya han nacido en la ciudad,⁸ se han criado en ella o al menos tienen parientes cercanos, y entonces suelen arrimarse al negocio informal familiar o de allegados cercanos. Ni siquiera esa vía es fácil, por su mala remuneración e inestabilidad: “como eran padrinos míos, el trato era terrible”.

Por esas dificultades, muchos padres “se sacan la mugre” para que sus hijos estudien y entran incluso en la universidad, para mejorar así sus oportunidades. Poder ir al colegio ya tiene mucho de liberación: “Uno en la casa convive con los problemas. Cuando va al colegio uno sale de los problemas” (Sandoval y Sostres 1989:188). Pero, más allá de este escape momentáneo, salir de la pobreza por esa vía educativa tampoco es algo automático. De los 12.000 nuevos bachilleres anuales de El Alto, sólo unos 2.000 pueden continuar sus estudios o llegan a encontrar trabajo (ER 19).

Por una y otra vía muchos sienten frustraciones. Algunos llegan incluso a crear su propia cultura marginal, asociándose a grupos de pandilleros, aunque las limitaciones climáticas ayudan a que en esa ciudad a 4.000 metros de altura los que viven y duermen en la calle son muchos menos que en otras metrópolis latinoamericanas.

Emblemática de todas estas tensiones es la creación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), forzada por miles de jóvenes que en 1998 tomaron durante meses unos predios desocupados de la Universidad Mayor San Andrés en El Alto. Desde entonces la UPEA ha seguido inestable por permanentes pleitos internos sobre recursos y presupuesto—incluidos varios cambios violentos de rector por acusaciones de malversaciones o simples pujas políticas internas—pero también para asistir a protestas y marchas. En medio de todo ello, hay allí una búsqueda de sentido de la realidad actual y futura, con una fuerte dosis de inquietud y acción política,

que puede transitar por el indianismo, el socialismo o el trostkismo, arrimándose sobre todo, según la coyuntura, al MAS de Evo Morales o al MIP de Felipe Quispe, junto con una gran ansiedad por lograr una buena educación superior.

Llama la atención que sean relativamente pocos los que, en medio de estas presiones, deciden rechazar sus raíces aymaras. Más podrían caracterizarse como aymaras de habla castellana. Según el Censo 2001, quienes se consideran aymaras superan el 80 por ciento hasta los de 20 y más años y solo en el grupo de 15–19 años desciende al 76 por ciento. Pero los que se dicen aymaras sin saber ya la lengua suben al 10 por ciento en el grupo de 35–39 años, al 19 por ciento en el de 25–29 años y al 39 por ciento en el de 15–19 años, sin diferencias por género (Molina y Albó 2006:197). Esta notable pérdida de la lengua originaria en los jóvenes se inicia ya con la presión de sus padres—”no hables aymara, para que te respeten más”—y de la educación urbana monolingüe. Pero además los chicos y jóvenes le dan poco uso en la calle, en un paisaje lingüístico urbano en que prevalece por mucho el castellano.

Ser aymaras sin saber ya la lengua por haber crecido y nacido incluso en la ciudad supone sin duda otras formas de percibir esa identidad. Los jóvenes buscan marcar su diferencia generacional y, dentro de ella, las especificidades individuales que les den personalidad y prestigio, con su indumentaria, adornos, peinados, vocabulario, gestos y con su inmersión en la tecnología y cultura de la informática y la electrónica, muy barata en El Alto gracias a la piratería, de maneras semejantes a lo que ocurre también con los jóvenes en otras sociedades. Todo ello provoca sin duda conflictos entre las seducciones del mercado y su bajo poder adquisitivo. Pero no les genera mayores traumas. Hay un significativo contraste, por ejemplo, con jóvenes indígenas que han quedado desplazados y sin rumbo en las favelas del Brasil, los “pueblos jóvenes” de Lima o inmersos en la cultura “mara” de las barrancas de la ciudad de Guatemala.

La diferencia se debe a que en un ambiente vital como el de El Alto, cabe desarrollar una nueva versión joven, sincrética y dinámica de la cultura aymara urbana. Ayuda a ello la existencia de una poderosa tradición celebrativa urbana en expansión, que facilita la inserción social y cultural de estos jóvenes tanto a través de sus barrios y sus establecimientos escolares como de los numerosos grupos que ellos mismos van formando, con una amplia gama de opciones. En las diversas entradas religioso-foklóricas de El Alto conforman sus propios conjuntos o secciones especiales—como el *tinku*, los *caporales* o sus propias “figuras” en conjuntos más tradicionales—o crean sus propios espacios y estilos sincréticos, incluyendo la música *techno* o el *rap*, a las que a veces añaden modalidades propias y el adjetivo “aymara”. En el solsticio de cada 21 de junio, en que desde hace varios años se ha introducido, por un proceso de etnogénesis, el Año Nuevo Aymara, estos jóvenes han añadido el “Rocklsticio del Año Nuevo Aymara”. La banda Skoria canta en aymara el lema

“Volveré y seré millones,” atribuido a Tupaq Katari cuando estaba a punto de ser descuartizado por los españoles en 1781, etcétera.⁹

En síntesis, el indudable poder simbólico de la lengua para marcar la propia identidad cultural aymara, en esta generación joven va quedando reemplazado en buena parte por una creativa combinación de nuevos símbolos expresivos celebrativos y de una militancia política que a la vez refleja las frustraciones, aspiraciones y sueños de estas nuevas generaciones. Toda esta búsqueda y febril actividad muestra una ciudad nueva, *in the making*, que se va constuyendo con una vitalidad que ya no tiene par en la ciudad madre de La Paz. Por eso uno de los adjetivos que se da a El Alto es “la ciudad del futuro,” un futuro hecho ya cada vez más presente.

La Catarsis del 2003

Esta misma es la ciudad y estos los grupos sociales que en octubre del 2003 pasaron a los titulares mundiales. No llegaba de sorpresa. Eventos como las presiones juveniles para apoderarse de unos predios y crear en ella la UPEA y tantas otras marchas y manifestaciones por las permanentes demandas de juntas vecinales y otros sectores sociales, ya indicaban su creciente protagonismo primero dentro del conjunto metropolitano y, de ahí, también en la vida política nacional.

El primer momento de catarsis empezó en La Paz y se expandió a El Alto en el llamado *Febrero negro* de 2003. El 12 y 13 de ese mes, con ocasión de un “impuestazo” al salario, ocurrió una grave rebelión de policías que, liderados por el mayor David Vargas y el Grupo Especial de Seguridad, tomaron la plaza Murillo en el centro político de La Paz y asediaron el Palacio de Gobierno hasta que fueron reprimidos por el Ejército con un saldo de 15 muertos y 76 heridos, que el día siguiente ascendieron hasta 33 muertos más centenares de heridos, sobretodo por nuevos civiles muertos entre La Paz y El Alto.¹⁰ En efecto, en medio de aquel desbarajuste y aprovechando la ausencia de la policía, diversos grupos mayormente juveniles de La Paz incendiaron y saquearon un ministerio y otras oficinas públicas, cuatro sedes de partidos gobernantes y varios comercios, hechos que fueron ampliamente mostrados en la televisión y pronto imitados en varias ciudades del país aquella misma noche y el día siguiente.

La más obvia y notable imitación fue la expansión a la ciudad gemela de El Alto. En un movimiento popular sin una clara dirección central, se incendiaron las oficinas de connotadas empresas, el edificio de un banco de crédito popular y, sobretodo, la sede de la alcaldía que quedó hecha ruinas, con la pérdida de numerosa documentación. Al día siguiente se asaltaron también los depósitos de la Aduana, donde se acumula mucha mercancía confiscada cuyos dueños deseaban recuperar.

Los medios resaltaron la presencia de jóvenes entre los alzados e insistieron sobre todo en el rol de los universitarios de la UPEA. Sin duda los hubo pero parece

que—como en tantos otros disturbios urbanos— a los lugares asaltados llegaban grupos igualmente diversos y dispersos, cada uno con sus intereses y sentimientos. No eran los mismos los que fueron al Palacio de Gobierno, donde hubo una obvia planificación de los policías rebeldes y otros; a las sedes de partidos, acción más política de oposición; los que saquearon comercios y la Aduana; y los jóvenes frustrados que incendiaron la alcaldía. Como contrapunto de estos últimos, otros jóvenes, miembros de la orquesta sinfónica de El Alto que tiene su sede en la misma alcaldía, realizaron una audaz operación para rescatar sus instrumentos y a los pocos días ofrecieron un estremecedor concierto en las humeantes ruinas de su sede.¹¹ Era la otra cara de la juventud alteña.

La siguiente arremetida empezó en septiembre y se remató en el que ha pasado a la historia como el *Octubre rojo*,¹² culminación de la catarsis. Aunque hubo de nuevo diversos autores no sincronizados, esa vez hubo una mayor iniciativa del MAS (Movimiento al Socialismo), cuyo máximo dirigente, Evo Morales, llegará a la Presidencia por mayoría absoluta apenas dos años después, tras las elecciones de diciembre del 2005.

El MAS organizó marchas y protestas por todo el país—incluidas La Paz y El Alto, obviamente— para protestar contra los planes del Gobierno de vender y transformar el gas boliviano a través de Chile, por las ventajas técnicas de costo y comerciales que esta opción tenía sea para el país o quizás más para las empresas multinacionales implicadas. Desconfiar frente a negocios internacionales de los gobiernos con recursos naturales es una actitud boliviana muy común, sobre todo en la izquierda política y laboral, a la luz de lo ocurrido ya en la historia nacional. Pero en este caso del gas se añadía el sentimiento nacional anti-chileno tras la derrota militar de 1879, en que Bolivia perdió no sólo minerales sino también su mar. Tal sentimiento ha sido alimentado de manera eficaz durante más de cien años por el Estado, la escuela, los medios y el cuartel, con un impacto particular en los sectores populares.

Simultáneamente, con diferencia de días, en El Alto se añadían otras varias protestas más locales. Las juntas vecinales protestaban contra la alcaldía por dos nuevos formularios llamados *maya* y *paya*—uno y dos, en aymara—diseñados para reorganizar el régimen impositivo, dada la pérdida de archivos en el incendio de febrero. Pero las juntas sospechaban que era una excusa para aumentar impuestos, por lo que generaron numerosas marchas y ocupaciones de calles para que se los retirara. La UPEA se les unía reclamando de paso por su presupuesto y autonomía. El lunes 8 de septiembre miles de comunarios y transportistas llegaron a la ciudad de El Alto por el tema del gas. Se les unieron dirigentes del campo, liderados por Felipe Quispe (que en 2000 fundó el MIP, Movimiento Indígena Pachakuti), que reclamaban la liberación de un dirigente campesino detenido desde julio y que era acusado de haber ultimado a dos ladrones de ganado en aplicación de la “justicia

comunitaria,” sin pasarlos a la justicia ordinaria. Por no liberar al detenido, fracasó una comisión gubernamental y, desde el miércoles 10 Felipe Quispe, junto con centenares de autoridades comunales iniciaron una masiva huelga de hambre en el auditorio de la Radio San Gabriel,¹³ en la populosa Villa Adela.

Desde el día 15, mientras las juntas alteñas iniciaban un paro general por el *maya paya*, en varias partes del altiplano empezaban bloqueos por esos, sus nuevos reclamos, más los de un viejo pliego petitorio del MIP con 72 puntos. Pero, como suele ocurrir en tales bloqueos, lo central no era tanto lograr respuestas concretas a algunos de esos puntos sino expresar por un lado su protesta por la pobreza y marginación general en que viven y, por otro, mostrar ese poder solidario de la organización comunal. Gas, impuestos, autonomía; juntas urbanas y dirigentes rurales; aplicación de la justicia e identidad; pugnas políticas y protesta generalizada. Todo conducía a todos para movilizarse tanto en la ciudad como en el campo.

Si el Febrero Negro reflejó sobre todo la vinculación entre La Paz y El Alto y la frustración de sectores jóvenes de la metrópoli, el Octubre Negro expresó los fuertes lazos entre El Alto y el agro aymara y también con un amplio movimiento político nacional.

Es probable que todo ello hubiese acabado en mantener débil al gobierno, como en otras ocasiones, de no haber ocurrido un detonante que, en el fondo, resalta los sensibles umbrales de rechazo a la represión violenta en Bolivia. Las primeras muertes ocurrieron el 20 de septiembre en el altiplano de resultados de una tan publicitada como malhadada operación de rescate de unos “turistas” varados por los bloqueos, organizada por el Ministro de Defensa con helicóptero, policías y fuerzas de choque del ejército. Dejó un saldo de cuatro campesinos y un militar muertos, entre ellos una niña de nueve años que simplemente miraba tras la ventana de su casa.

Pero la mayor matanza de civiles indefensos ocurrió al intentar romper un paro general de todo El Alto también por el tema del gas, iniciado el miércoles 8 de octubre. El día 9 ocurrió un primer enfrentamiento para frenar la entrada a la ciudad de un grupo de cooperativistas mineros asociados al MAS. El saldo fueron un niño y dos mineros muertos. Dos días después, el sábado 11, ante la escasez de gasolina en la ciudad, el Gobierno envió al Ejército para abrir paso a un convoy de carros cisterna, barriendo a bala ambos lados del camino, y ocupó después militarmente la ciudad de El Alto, recorriéndola el domingo 12 de un lado a otro a bala y fuego. El saldo mínimo final, desde el 20 de septiembre, fue de 59 muertos y 411 heridos registrados con nombre y certificación forense en los diversos lugares de enfrentamiento: mucho menos de los que los gobernantes habían calculado inevitables para reestablecer el orden, mucho más de los que la sociedad estaba dispuesta a tolerar.

Fue el principio del fin, pues esta aplicación sangrienta de tácticas bélicas frente a civiles desarmados exacerbó también a otros sectores de clase media, desencadenó marchas nunca vistas de cientos de miles desde El Alto y la periferia de La Paz hasta el centro político de La Paz y del país, precipitando en cinco días la renuncia y huida de Sanchez de Lozada el 17 de octubre del 2003.

Durante estos días de octubre me tocó estar en la ciudad de El Alto y tuve la oportunidad de ver—al menos en los barrios del norte por donde me cupo compartir y transitar—su nuevo rostro en momentos de catarsis: una ciudad en duelo por sus muertos, pero también movilizada y solidaria como nunca en su profunda irritación. Por razones de espacio, me fijaré sólo en un aspecto central de ello: el rol y la lógica de las juntas vecinales, tanto de los dirigentes como de sus bases.

Las juntas vecinales mostraron una capacidad de organización y movilización interna y entre ellas, al menos las de un mismo sector, muy superior a lo que se observa en su rutina cotidiana. En las primeras marchas y movilizaciones, algunos vecinos y vecinas sólo se movían bajo la amenaza de multas, en dinero, especie o trabajo y diversificadas según la capacidad conocida de cada uno. Pero una vez movilizadas, la participación de todos era muy activa y decidida, hasta el punto que en algunos casos fueran las propias bases las que cambiaron a sus dirigentes si los veían demasiado pasivos. Hubo también otros cambios a principios del levantamiento al parecer por influencia de los partidos MAS y MIP, los que entonces tenían más influencia sobre las juntas.

Las actividades de las juntas no consistieron sólo en marchar y bloquear el paso de vehículos en esquinas clave en señal de protesta. En los días más cruciales organizaron también turnos de vigilancia nocturna y fogatas en las principales esquinas para evitar cualquier sorpresa, sea del ejército o de pandillas desconocidas, mientras otros grupos cavaban zanjas en las calles para evitar el paso de carros blindados o tanquetas. Las principales avenidas estaban literalmente alfombradas de piedras y vidrios.

No todos los barrios actuaron con el mismo vigor ni sufrieron la represión por igual. Sectores como Villa Ballivián, Villa Ingenio y Senkata se llevan la palma. Se menciona poco, en cambio, a la Ciudad Satélite, la zona (relativamente) más pudiente de El Alto, aunque otros barrios también acomodados, como el céntrico Villa Adela, tuvieron una acción decidida de vigilia y apoyo a los que allí estaban realizando su huelga de hambre en Radio San Gabriel.

Notable fue también la participación activa de las redes de mujeres dirigentes, a las que un reciente libro testimonial de aquel octubre llama “la columna vertebral de la insurrección” (Choque et al. 2005), pese a que en situaciones normales juegan un rol dirigencial bastante subordinado (Salazar 1999). He aquí la declaración de una mujer al reportero de Radio Pachamama (2004, track 5), el sábado 11 de octubre, en plena calle cuando arreciaba la masacre:

Mañana puede ser el último día de nuestras vidas, de las mujeres. No estamos de miedo ante este gobierno asesino. Vamos a morir las mujeres. Ya no los hombres, porque a los hombres los maltratan, los patean. Nuestros maridos son el sustento de nuestros hogares, aunque poco nos traen . . . Por eso las mujeres hemos dicho: Mañana nosotras las mujeres hemos de estar en la calle. Si es que hemos de morir, moriremos como mujeres valerosas, ¡de pie!

En mis andanzas por El Alto, me sorprendió en varias partes cómo las mujeres de los piquetes exigían a enviados o potenciales mediadores que les hablaran en aymara, a pesar de que la mayoría de ellas entendía perfectamente el castellano. Resaltaban así su identidad. En esas largas jornadas de paro y desabastecimiento apenas vi protestar a la gente por su falta de comida, transporte y otras necesidades básicas. Se debió no sólo a provisiones tomadas sino a redes ocultas de ayuda mutua sobre todo entre mujeres o entre vendedoras y sus caseritas. ¿Habría ocurrido lo mismo si hubiera llegado a faltar masivamente el gas doméstico para cocinar?

Lo anterior no excluye que haya habido también excesos entre los insurrectos. Algunos dirigentes actuaron de manera autoritaria, sobre todo en los momentos de mayor irritación. Por ejemplo, en algunas zonas empezaron a marcar con cruces pintadas las casas en que vivían policías y militares, como una forma de amenaza. Pero otros vecinos les reflexionaron recordando que eran gente del barrio suficientemente conocida y respetada, que no iba a actuar como los otros. Y la amenaza no pasó a mayores. Algunos grupos de jóvenes varones eran los más agresivos e imprudentes. Tumbaron a pulso varias pasarelas peatonales de cemento e incluso vagones de ferrocarril sobre la calzada para este mismo fin. Decían sentir la energía de la Pachamama (Madre Tierra) para este esfuerzo titánico, aunque después ya no lo tuvieron para colocarlo todo de nuevo en su lugar. El ataque a una gasolinera, para que no proveyera combustible a los vehículos militares, se les fue de la mano y provocó una explosión del tanque con varios muertos civiles.

Fue en el curso de estos días que el alcalde de El Alto, Pepelucho Paredes, rompió con su partido MIR y acompañó a los alteños en sus marchas hasta La Paz. El año siguiente formó su propio partido, el PP (Plan Progreso), al que se unieron siete concejales ex-miristas, y con él ganó las elecciones municipales de diciembre del 2004 por mayoría absoluta (53%), muy por encima del MAS, que quedó segundo pero con sólo un 17 por ciento.

Los análisis y relatos de las páginas anteriores sobre los aymaras alteños nos ayudan también a comprender algunos rasgos operativos poco comunes en multitudes alzadas.

Quizás por toda la experiencia acumulada en el 2003, con sus momentos de dolor y de euforia, su permanente tensión y el cansancio que al final quedó, cuando en el año 2005, después de un año de relativa tranquilidad, se reeditaron paros y protestas que condujeron a la renuncia del nuevo presidente Carlos Mesa, dirigentes

y bases acordaron de antemano su sobrevivencia. Se convino que cada día el paro y marchas sólo serían de diez de la mañana a siete de la tarde, para que por la mañana y por la noche todos pudieran vender y comprar sus artículos de primera necesidad.

Más aún, en los momentos más duros de este paro, tanto en El Alto como en La Paz, llegó la imprescindible Fiesta del Gran Poder, que convoca anualmente a decenas de miles de danzantes organizados en tropas o fraternidades que descienden desde las laderas más aymaras de La Paz hasta corazón de esta ciudad. La FEJUVE decidió entonces dar tregua sólo durante este día y todos bailaron o vieron bailar y estuvieron festejando como cada año. Al día siguiente las dos ciudades volvieron militantemente a su paro y movilizaciones como si nada hubiera pasado. Inaudito pero muy revelador de la dimensión cultural de esa movilización.

Cuando, semanas después, algunos dirigentes de FEJUVE intentaron endurecer las medidas, la gente ya simplemente no les hizo caso. Hay que señalar de paso que esas movilizaciones contra Mesa eran más un asunto político de las cúpulas directivas y movilizaban mucho menos a las bases. Éstas no tenían tampoco quejas contra aquel presidente, que se mantuvo fiel a su promesa de no usar la violencia represiva.

Epílogo 2006

A dos años largos de distancia, esta catarsis del 2003 puede interpretarse como una crisis de crecimiento de El Alto, tal vez para que llegue por fin a su mayoría de edad. La historia e incluso la apariencia externa de El Alto puede dividirse en un antes y un después del 2003, tanto por el proceder de la población como porque esta insurrección abrió por fin los ojos de muchas instancias públicas nacionales y extranjeras a las necesidades inmediatas y a la vez al potencial nacional de esta joven ciudad. La propia *Evaluación Rápida* de USAID (2004), tan citada en estas páginas, es una muestra de ello. Y con ello, el ritmo de asfaltado de calles y de dotación de otros servicios básicos se ha acelerado notablemente a partir de aquel octubre.

Esta maduración ha permitido ver también a plenitud el potencial aglutinador de las juntas vecinales, tanto por sus raíces comunitarias andinas como por sus injertos urbanos y mineros, que han añadido mayor decisión política y sentido militante a sus acciones. Hilando más delgado descubrimos niveles participativos distintos según zonas y grupos poblacionales. Se refleja también el potencial de las mujeres y de los jóvenes, y en éstos se sigue constatando su gama de actitudes, por ejemplo cuando en febrero unos quemaban la alcaldía mientras otros se movilizaban para salvar del fuego los instrumentos músicos. Es de todos modos un potencial que sólo funciona a fondo en circunstancias excepcionales como las que entonces se dieron.

Se vio también a cabalidad cómo El Alto y La Paz, por un lado, y El Alto y el Altiplano, por otro, siguen formando una unidad articulada. Se ha hecho patente a

la vez cómo, dentro de esta unidad mayor, El Alto—ciudad de inmigrantes pobres y aymaras—cumple un rol de bisagra entre el mundo más urbano de La Paz y esa periferia rural, y un papel catalizador de tantos problemas y esperanzas de estos pueblos más empobrecidos y marginados.

¿Fue una insurrección indígena aymara? Sí y no; o mejor, sí pero no sólo. La motivación más persistente y central fue talvez el sentimiento acumulado de frustración y protesta de toda esa multitud tan pobre y marginal. Por eso han jugado un rol tan importante en ella las mujeres y los jóvenes.

Pero lo más explicitado para alzarse fue más bien un tema de política nacional boliviana: la recuperación del gas, un recurso estratégico que está en el otro extremo del país. Como bolivianos, en la escuela y en el cuartel los sublevados habían aprendido mejor que los gobernantes la lección de que recursos básicos como el gas y el agua son de los bolivianos.

Y lo más visceral fue que esta multitud alzada es y se siente aymara y, como aymaras, mantienen muy viva la memoria de aquel *chacha warmi* Tupaq Katari y Bartolina Sisa que 222 años antes habían cercado allí mismo durante meses a los poderosos españoles parapetados en la Hoyada de La Paz.

Por eso, como pobres y marginados, aymaras y bolivianos, los insurrectos marcaron para el país la cabalmente llamada “agenda de octubre” que va desde la apropiación del gas hasta la refundación de una Bolivia plurinacional e intercultural, hacia la que parece que efectivamente estamos caminando. Una buena maduración de la ciudad de El Alto, tras su crisis de crecimiento del 2003.

Notas

¹Ver “Evaluación rápida de El Alto” [en adelante, ER] (USAID 2004).

²El toponímico La Ceja tiene dos sentidos. Puede referirse a este largo corte físico o, más concretamente a aquel punto y barrio de dicha Ceja en que confluyen los principales caminos y empieza la autopista hacia la ciudad de La Paz.

³En rigor, sólo la Sede de Gobierno. Sucre sigue siendo la capital y sede del Poder Judicial.

⁴CD estadístico de Molina y Albó (coord. 2006).

⁵El llamado “sindicato” llegó al campo sobre todo con la Revolución Nacional de 1952, inspirado en los sindicatos mineros. Pero una vez conseguido su objetivo de acabar con las haciendas, el “sindicato campesino” fue recuperado en gran medida por la organización comunal de siempre, añadiéndole una dimensión nacional y una perspectiva más política.

⁶El informe ER (p. 23ss) insiste mucho en las intenciones torcidas y mafiosas de lo que llama “dirigentes profesionales” e “indigenistas” anti-sistema. Sin duda los hay. Pero, visto desde la parte de El Alto que yo más conozco (Villa Tunari, en el Distrito 4), tengo la impresión de que exagera la imagen negativa.

⁷Avances de una investigación en curso para el PIEB, coordinada por Juan Yhonny Mollericona.

⁸Según Rossell y Rojas (2002:9), limitado a gente ocupada, los nacidos ya en la ciudad son un 30% de los mayores de 25 años, suben al 55% en el grupo de 20–24 años; al 71% en los de 15–19; y a un 87% en los menores de 14 años que ya están trabajando.

⁹Ver Guaygua et al. (2000), Flores (2002) y Rodríguez (2002). Éste fundó creador en el 1995 la Casa Juvenil de las Culturas Wayna Tambo y su apéndice la Radio Wayna Tambo 101.7 FM.

¹⁰Informe de Amnistía Internacional, “Bolivia, crisis y justicia. Jornadas de violencia en febrero y octubre de 2003”, en <http://amnesty.org/library/Index/ESLAMR180062004>.

¹¹Un video/sociodrama de Kitula Libermann (2005), junto con los protagonistas, recrea esta operación de rescate.

¹²Ver, entre otros, Suárez (2003), más inmediato y gráfico; Gómez (2004), más cronológico y descriptivo; y los análisis políticos interpretativos de Álvaro García et al. (2004). Incluyo mis propios recuerdos de aquellos días en que yo mismo estaba en El Alto.

¹³Radio católica educativa que transmite sólo en aymara y tiene la máxima audiencia rural.

Referencias Citadas

- Albó, Xavier, Thomas Greaves y Godofredo Sandoval
1981 Chukiyawu, la cara aymara de La Paz. La Paz: CIPCA, Vol. I, El paso a la ciudad.
- Albó, Xavier
1991 Bolivia: La Paz/Chukiyawu, las dos caras de una ciudad. *América Indígena* 4:117–158.
2002 Pueblos indios en la política. La Paz: CIPCA y Plural.
- Amnistía Internacional
2003 Bolivia, crisis y justicia. Jornadas de violencia en febrero y octubre de 2003. Documento electrónico, <http://amnesty.org/library/Index/ESLAMR180062004>, fecha de consulta 10 de agosto.
- Antezana, Mauricio
1993 El Alto desde El Alto II. Ciudad en emergencia. La Paz: UNITAS, Programa Sector Urbano Popular.
- Choque, Lucila, Lina Critto y Forrest Hylton
2005 La guerra del gas contada desde las mujeres. El Alto: Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
- Fernández, Javier
2001 Estrategias de movilidad social en El Alto. El Alto: EED/EZE y Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
- Flores, Patricia
2002 ¡¡¡Estamos vivos Q'put's!!! *Cuarto Intermedio* 62:3–15.
- García Linera, Álvaro, Raúl Prada y Luis Tapia
2004 Memorias de octubre. La Paz: Comuna y Muela del Diablo.
- Gómez, Luis A.
2004 El Alto de pie. Una insurrección aymara en Bolivia. La Paz: Comuna, Indymedia.
- Guardia, Fernando.
s.f. La evolución de la forma de la ciudad de La Paz, Bolivia. La Paz: ISAP.
- Guaygua, Germán, Ángela Riveros y Máximo Quisbert
2000 Ser joven en El Alto. Rupturas y continuidades en la tradición cultural. La Paz: PIEB.

INE

2002a Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. La Paz: Resultados departamentales. La Paz: Instituto Nacional de Estadística.

2002b Bolivia: Mapa de pobreza 2001. Necesidades básicas insatisfechas. Síntesis. La Paz: Instituto Nacional de Estadística.

Molina Barrios, Ramiro y Xavier Albó, coords.

2006 Gama étnico lingüística de la población boliviana. La Paz: Sistema de Naciones Unidas.

Monasterios, Karin y Luis Tapia

2001 Partidos y participación política de las mujeres en El Alto. El Alto: Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.

Quisbert, Máximo

2003 FEJUVE El Alto 1990–1998. Dilemas del clientelismo colectivo en un mercado político en expansión. La Paz/Chukiyawu: Aruwiyiri y THOA.

Radio Pachamama

2004 Para que el tiempo no borre la memoria . . . No a la impunidad. El Alto.

Rodríguez, Mario

2002 Vigorizaciones y negociaciones (inter)culturales. Una mirada a la juventud de El Alto desde la experiencia de Wayna Tambo. *En Memoria Intercultural: Comunicación y salud en el área rural*. II Congreso Nacional de Comunicación y Salud, del 28 al 30 de octubre 2002. Pp. 285–298. La Paz: Centro para Programas de Comunicación.

Rossell, Pablo y Bruno Rojas

2002 Destino incierto. Esperanzas y realidades laborales de la juventud alteña. La Paz: CEDLA.

Salazar de la Torre, Cecilia

1999 Mujeres alteñas. Espejismo y simulación de la modernidad. El Alto: Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.

Sandoval, Godofredo y Fernanda Sostres

1989 La ciudad prometida. Pobladores y organizaciones sociales en El Alto. La Paz: Sistema e ILDIS.

Suárez, Hugo José

2003 Una semana fundamental, 10–18 de octubre 2003. La Paz: Muela del Diablo.

USAID

2004 Evaluación rápida de El Alto, bajo la dirección de Rafael Indaburu. Documento electrónico, <http://www.usaidbolivia.org.bo/StudiesandReports/InformeFinalElAlto.pdf>, fecha de consulta, 10 de agosto.